

**JUZGADO SEGUNDO (02) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE  
POPAYAN  
DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN- CAUCA  
Calle 8 Nro. 10 – 00 Palacio de Justicia  
j02prpcppn@cendoj.ramajudicial.gov.co**

**AUTO No. 2**

Popayán, veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).  
Notifica por anotación en estado No. 128 del 26 de noviembre de 2.021

**REF: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR RAD: No. 190014189002 2021-00797-00.**

**DTE: EMTel S.A. E.S.P. NIT. 891502163-1**

**APDO: JUAN MANUEL ORREGO FERNANDEZ. cartera@emtel.com.co**

**DDOS: ANDREA NORAYDA CAMAYO COTAZO. C.C. 1.061.737.993**

**ASUNTO A TRATAR**

Mediante el presente proveído procede el Despacho a estudiar la viabilidad de librar o no el deprecado mandamiento de pago.

**CONSIDERACIONES**

Como base de recaudo ejecutivo se aporta la factura No. 18872875 expedida por la entidad demandante, no coincidente con la comunicada en el escrito de la demanda (4/15/2021, 11/18/2019, 10/16/2019) la cual registra un valor a pagar de \$899.930.00, no concordante con el valor ejecutado en el escrito de la demanda (\$879.410.00) saldo que se encuentra en mora.

Para resolver sobre el mandamiento de pago deprecado hay que recordar que el inciso 3° del art.130 de la Ley 142 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 689 de 2001, y reguladora del Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios, consagra lo siguiente: *“Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos, podrán ser cobradas ejecutivamente ante la jurisdicción ordinaria o bien ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos. La factura expedida por la empresa y debidamente firmada por el representante legal de la entidad prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial”*.

A su turno el artículo 147 establece que las facturas de los servicios públicos se pondrán en conocimiento de los suscriptores o usuarios para determinar el valor de los bienes y servicios provistos en desarrollo del contrato de servicios públicos y, el 148 alude a los requisitos que deben reunir dichas facturas. El último artículo en comento, en su inciso segundo, expresamente consagra que *“En los contratos se pactará la forma, tiempo, sitio y modo en los que la empresa hará conocer la factura a los suscriptores o usuarios, y el conocimiento se presumirá de derecho cuando la empresa cumpla lo estipulado. Corresponde a la empresa demostrar su cumplimiento. El suscriptor o usuario no estará obligado a cumplir las obligaciones que le cree la factura, sino después de conocerla”* (resaltado fuera de texto).

De acuerdo con lo anotado, se colige que nos encontramos frente a un típico caso de título ejecutivo complejo, donde debe aportarse por parte del demandante la factura firmada por el representante legal de la empresa y el contrato para la prestación del servicio público domiciliario correspondiente, pero además la prueba de que la Empresa dio a conocer al usuario –demandado- la factura en los términos indicados en el artículo transcrito.

En efecto, al pronunciarse sobre el particular, la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, en el mes de mayo de 2001 –Exp.16508-, precisó, entre otras, que: *“La carga procesal impuesta a la empresa de servicios públicos ejecutante de demostrar su cumplimiento constituye una garantía de defensa del propietario del inmueble, suscriptor o usuario del servicio, puesto que de este modo existe la seguridad de que la factura como acto administrativo fue conocida por él...”*

De la misma manera la citada Corporación puntualizó lo siguiente:

*“De suerte que es necesario adjuntar el contrato de servicios públicos y la factura para establecer si el título ejecutivo es idóneo, lo que hace al título ejecutivo complejo. Este título ejecutivo no provendrá del deudor, como lo exige la norma general para los títulos ejecutivos (artículo 488 C. de P. Civil), sino de la empresa de servicios públicos acreedora, y el mismo constituye por ministerio de la ley, prueba de exigibilidad ejecutiva.”*

*“Como requisito de procedibilidad en la acción ejecutiva la ley consagra el conocimiento de la factura por parte del suscriptor o usuario, el cual se presume de derecho cuando la empresa demuestre haber cumplido con las obligaciones de hacerla conocer del suscriptor o usuario en la forma, tiempo, sitio y modo previstos en los contratos de servicio público (2º. Inciso del art.148 de la Ley 142 de 1994)”.*

*“Por lo tanto, para que proceda la ejecución con base en la factura de servicios públicos, es necesario que la misma se encuentre en firme, es decir, que contra ella no se haya formulado procedimiento administrativo de reclamación o que habiéndose cumplido este, ya se hubieren decidido los recursos gubernativos de reposición y apelación interpuestos por el suscriptor y usuario”.*

*“Pero además, la factura o título de ejecución debe ser una obligación expresa, clara y actualmente exigible. Sólo así el título ejecutivo estará prevalido de la eficacia o certidumbre necesaria para que el juez haga efectivo en forma forzada, el derecho declarado en el documento respectivo”.*

Siendo así las cosas, la factura de venta No. 18872875 de servicio público domiciliario que pretende ejecutarse no coincide con la comunicada en el escrito de la demanda (4/15/2021, 11/18/2019, 10/16/2019) debe ser muy clara en su contenido (artículo 422 del CGP), tal como lo prevé el artículo 148 de la ley 142 de 1994; es decir que el suscriptor pueda establecer con facilidad cómo se determinaron y valoraron los consumos, cómo se comparan éstos y su precio con los periodos anteriores, y el plazo y modo en el que debe hacerse cada pago, la forma de liquidación de los intereses moratorios e intereses acumulados, los extremos dentro de los cuales se generaron los intereses moratorios y los acumulados, la mención de los meses adeudos indicando cuáles son y a qué año corresponden y su monto preciso; situaciones que no se vislumbran en el título que se trae a este juzgado, donde la entidad demandante se limita a indicar el valor total a pagar que asciende a \$899.930.00; no concordante con el valor ejecutado en el escrito de la demanda (\$879.410.00) información incompleta, que impide que el suscriptor tenga certeza de las sumas cobradas.

Hay que destacar que en el listado de conceptos de la factura que se presentó para el cobro, aparece un ítem que indica “total a pagar... \$899.930.00”; sin que se explique en la factura de dónde proviene dicho monto y se haga de manera discriminada y explicada.

Al tratar el punto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial – Sala Civil de Bogotá<sup>1</sup> explicó

*“De conformidad con lo previsto en la ley 142 de 1994, para que las facturas de servicios públicos constituyan títulos ejecutivos, es necesario que se cumplan los requisitos que a continuación se detallan:*

*i. La factura debe ser expedida por la empresa y debidamente firmada por el representante legal de la misma.*

---

<sup>1</sup> (fechado Veintisiete (27) de mayo de 2005)

ii. Deberá ser puesta en conocimiento de los suscriptores o usuarios para determinar el valor de los bienes y servicios provistos en desarrollo del contrato de servicios públicos, correspondiendo a la empresa demostrar el cumplimiento de ello.

iii. Deberá contener como mínimo, la “información suficiente para que el suscriptor o usuario pueda establecer con facilidad si la empresa se ciñó a la ley y al contrato al elaborarlas, cómo se determinaron y valoraron los consumos, cómo se comparan éstos y su precio con los de períodos anteriores, y el plazo y modo en el que debe hacerse el pago” (Artículo 148 ley 142 de 1994)

2. En el presente asunto advierte la Sala que los dos últimos requisitos antes reseñados no concurren en el documento aportado con la demanda y que se pretende sirva como título para la presente ejecución. Nótese que dentro del expediente no hay prueba de la que se derive que la factura que se pretende cobrar fue puesta en conocimiento del demandado, carga que le corresponde exclusivamente a la entidad demandante.

Lo mismo ha de indicarse en cuanto al tercer requisito, pues en la factura aportada la sociedad demandante se limita a indicar detalle cobro del servicio de telecomunicaciones, meses deuda (11) el “total a pagar (\$899.930.00), información que no es suficiente para que el usuario o suscriptor, tenga certeza de si las sumas cobradas se ciñen al contrato de condiciones uniformes, máxime si se tiene en cuenta que en la misma no se especificó a cuánto ascendieron cada uno de los consumos cobrados y cómo se calcularon los mismos; ni obra la fecha ni forma de pago, requisitos estos que como se dijo anteriormente debe contener la factura para que pueda servir de título ejecutivo. (Resalta el Despacho).

Al igual, prudente es recodar la jurisprudencia emitida por la Sesión Tercera del Consejo de Estado, jurisdicción anteriormente encargada del conocimiento de este tipo de ejecuciones, según la cual:

*«En lo que respecta a los procesos ejecutivos derivados de los contratos de prestación de servicios públicos domiciliarios, el título para la ejecución lo conforman el contrato de prestación de servicios o de condiciones uniformes y la factura respectiva, en una interpretación sistemática de los artículo 128, 130 y 148 de la ley 142 de 1994, tal como lo sostuvo la sala en providencia del 89 de octubre de 1997, expediente 12.684.*

En este orden de ideas, el despacho se abstendrá de librar el mandamiento de pago solicitado, toda vez que por parte de la empresa ejecutante no se dio cumplimiento al tercer requisito, esto es, que la factura que se pretende cobrar no especifica claramente los montos y conceptos adeudados, los meses a los que corresponde cada suma, los intereses generados y los extremos de los intereses adeudados.

Por lo expuesto el **JUZGADO SEGUNDO (02) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE POPAYAN,**

#### **R E S U E L V E:**

**PRIMERO.- ABSTENERSE** de librar mandamiento de pago en la presente demanda promovida por **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P.** en contra de la señora **ANDREA NORAYDA CAMAYO COTAZO**, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

**SEGUNDO.- RECONOCER** personería para actuar al abogado **JUAN MANUEL ORREGO FERNANDEZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.061.752.170 y T.P. 343040 del C.S.J, de conformidad con el poder conferido por la parte demandante.

**TERCERO.- ARCHIVAR** lo actuado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
VÍCTOR FABIO DE LA TORRE VARGAS  
Juez